

SRA/2025



SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA
ARS 2025 / AMERICAN REGIONAL SECURITY REPORT

INFORME
Marzo 2025



Universidad
de Navarra

© Marzo 2025

Center for Global Affairs & Strategic Studies

Universidad de Navarra

Facultad de Derecho–Relaciones Internacionales

Campus Pamplona: 31009 Pamplona

Campus Madrid: Marquesado Sta. Marta 3, 28027 Madrid

<https://www.unav.edu/web/global-affairs>


SRA/2025



INFORME
Marzo 2025

SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA *ARS 2025 / AMERICAN REGIONAL SECURITY REPORT*

La ofensiva regional de Trump

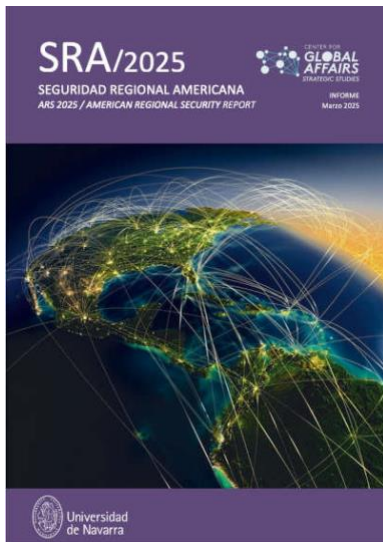
 El estreno de la segunda presidencia de Donald Trump está siendo especialmente convulso para las relaciones de Estados Unidos con los países de su entorno continental. La victoria del magnate neoyorquino en las presidenciales de 2024 ha estresado la relación hemisférica. El Canal de Panamá constituye la piedra de toque de la vinculación del gran país del Norte americano con la comunidad de naciones al Sur: construido por el largo aliento del imperialismo estadounidense, su entrega al pequeño país centroamericano supuso una suerte de reconciliación histórica de Washington con los vecinos de su ‘patio trasero’ y con el resto de América Latina.

Por eso la acometida de Trump contra la soberanía panameña del Canal trastoca completamente el orden interamericano. Panamá ha actuado rápidamente para apartar a China de las orillas de esa vía interoceánica y está considerando modos de un trato de favor hacia EEUU en el tránsito por el Canal que no dañe su compromiso de neutralidad ante la comunidad internacional. También el gobierno del presidente Mulino se ha prestado a ayudar a la Administración Trump en aliviar la presión migratoria, intentando ‘cerrar’ la válvula del Darién: el paso en el istmo que permitía emigrar a pie hacia Estados Unidos desde Sudamérica.

Con todo, la presión de Trump continúa, por lo que no está claro si su propósito final es tomar efectivamente el Canal, lo que no ocurriría de forma pacífica. Pero es que el reelegido presidente está actuando contra leyes y jueces, como en su lucha contra el venezolano Tren de Aragua y la deportación de sus presuntos miembros. Estos asuntos ponen en primer plano la seguridad regional americana, que en el último año también se ha visto afectada por cuestiones como la consolidación en Cuba de las instalaciones de espionaje de China, la penetración del narcotráfico en el negocio del aguacate, la violencia estallada en la región colombiana del Catatumbo que entierra la Paz Total de Petro y el ligero descenso de los femicidios en los primeros meses del sexenio de la primera mujer presidente de México.

Emili J Blasco

Center for Global Affairs & Strategic Studies



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

**El regreso de Trump estresa la relación hemisférica:
Del Canal de Panamá al Tren de Aragua** 5

GEOPOLÍTICA

**Panamá aparta a China del istmo ante las presiones
de Estados Unidos** 8

GEOPOLÍTICA

**Trump exige una relectura de la ‘neutralidad’ del
Canal de Panamá** 11

MIGRACIONES

**Migración ‘reversa’: El Darién comienza a ver
migrantes que vuelven hacia el Sur** 14

ESPIONAJE

**China consolida en Cuba las instalaciones para
espionar a su gran rival desde su ‘patio trasero’** 17

CRIMEN ORGANIZADO

**El Tren de Aragua se establece como grupo
transnacional, de Chile a Canadá** 20

CRIMEN ORGANIZADO

**Los cárteles mexicanos sacan beneficio del boom del
aguacate, fruto estrella en EEUU** 23

CONFLICTO ARMADO

**Sin ‘Paz Total’: Fuerte recrudecimiento de la
violencia en Colombia durante el Gobierno Petro** 26

SEGURIDAD CIUDADANA

**Los femicidios en México bajan ligeramente tras
rayar los mil anuales en el mandato de AMLO** 29



Los panameños celebran la ampliación del Canal en 2016, inaugurada con el tránsito de un barco chino [ACP]

RESUMEN EJECUTIVO

El regreso de Trump estresa la relación hemisférica: Del Canal de Panamá al Tren de Aragua

Hacia La perspectiva de la reelección de Trump y luego su victoria en las presidenciales estadounidenses marcaron en la segunda mitad de 2024 la agenda de las cuestiones hemisféricas. Esa dinámica se acentuó cuando el magnate neoyorquino ocupó de nuevo la Casa Blanca: desde el 20 de enero de 2025 se suceden meses de gran intensidad en los que, junto a las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania, el foco está en gran medida en asuntos que afectan a las relaciones entre Estados Unidos y los países de su entorno americano, desde la inmigración y el crimen organizado al avance de la presencia china en sectores económicos o emplazamientos estratégicos.

El reclamo que ha hecho Trump sobre el Canal de Panamá, con la amenaza velada incluso de una toma por la fuerza, constituye el mayor cuestionamiento en décadas al orden de seguridad interamericano. Tiene sentido la inquietud de Washington por el movimiento de fichas de Pekín en el ‘patio trasero’

estadounidense: cuando hace un cuarto de siglo una empresa de Hong-Kong tomó control de los puertos de Cristóbal y de Balboa, uno en cada boca del Canal, la excolonia británica tenía su autonomía y

China estaba lejos de ser rival de EEUU; hoy las circunstancias geopolíticas han cambiado. Por eso, el gobierno de Panamá rápidamente ha respondido a la presión de la Administración Trump: la empresa hongkonesa abandona esos puertos y además Panamá rompe el acuerdo de participación en la Ruta de la Seda china; también los chinos han sido apartados de la construcción de un nuevo puente sobre el Canal, así como de la principal apuesta ferroviaria del país.

Con todo, Trump sigue advirtiendo de su deseo de recuperar el Canal para Estados Unidos. Podría entenderse como una maniobra para lograr una rebaja en los peajes de tránsito por esa vía interoceánica, como también ha reclamado. En esto al gobierno del presidente José Raúl

Mulino le puede costar más dar algunos pasos que satisfagan a Washington, pero el Departamento de Estado ya ha dado entender que prevé un acuerdo sobre el paso libre de peaje para los barcos de guerra estadounidenses. Si esto quizá cabe en el marco establecido por el Tratado de Neutralidad vigente, un trato especial en el caso de las mercancías requeriría ser regulado por otro tratado.

El nacionalismo del que está haciendo gala Trump en su segundo mandato, más allá del pragmatismo en la satisfacción de intereses que mostró en el primero, siembra dudas sobre su propósito final (también en lo que afecta a Groenlandia y Canadá). La información que ha trascendido sobre el encargo al Pentágono de un plan para hacerse con el Canal por la fuerza resulta inquietante.

Tampoco estaría sirviendo de mucho para diluir la fijación de Trump los gestos hechos por Mulino para un mayor control migratorio. Ya desde que este asumió la presidencia, en julio de 2024, aumentaron las deportaciones –pagadas por EEUU– de quienes llegaban al país ilegalmente, cruzando el Tapón de Darién. Entre 2021 y 2023 cruzaron este paso selvático más de 900.000 personas, alimentando las caravanas que luego llegaban a la frontera estadounidense, marcando un récord absoluto en la presión migratoria. La decidida política de Mulino, que ganó las elecciones con un claro mensaje anti inmigratorio, y luego la victoria de Trump han reducido drásticamente el flujo migratorio. Por primera vez está habiendo un reflujo –una migración reversa–, engrosada por quienes no pueden entrar en EEUU y deciden dar marcha atrás. También Mulino ha aceptado recibir vuelos de migrantes expulsados por EEUU para luego repatriarlos desde Panamá. Ante estas acciones, el número de personas que estos primeros meses de 2025 se aventuran a cruzar el Darién se ha reducido más del 90% respecto al año anterior. El presidente panameño ha dado por “cerrado” el Darién, si bien las dinámicas vividas podrían repetirse dado que las causas de la migración persisten.

Otro aspecto que ha sido subrayado con la reelección de Trump es el combate contra los grupos de crimen organizado de la región. El mismo día de su toma de posesión, Trump firmó

una orden ejecutiva declarando a la salvadoreña Mara Salvatrucha y al venezolano Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras; la lista fue ampliada un mes después con los ocho principales carteles mexicanos. Esa designación podría avalar internamente operaciones antiterroristas fuera de las fronteras de Estados Unidos, lo que en su caso generaría conflictos diplomáticos con los países en los que se desarrollaran. La inclusión del Tren de Aragua se producía después de que este grupo alcanzara gran notoriedad en 2024, a raíz del asesinato de un exiliado venezolano en Chile, posiblemente por encargo directo desde el gobierno de Nicolás Maduro, y por acciones de extrema violencia en ciudades estadounidenses, además de actuaciones en muchos otros lugares, en una extensión del grupo por todo el continente siguiendo la nutrida diáspora venezolana. El grado de conexión entre el Tren de Aragua y la cúpula chavista —al parecer existente, aunque no se trate de una vinculación orgánica ni operativa—, podría jugar un papel en posibles represalias Washington contra el régimen instalado en Caracas.

La actuación de Trump muestra un recobrado interés de Washington por su entorno continental más próximo. A ello contribuye la penetración de China en el Caribe, no solo en Panamá, sino también en Cuba, donde Pekín está consolidando instalaciones para la detección de señales y espionar a su gran rival. Esa actividad de espionaje salió a la luz en 2023, siendo entonces confirmada por las autoridades estadounidenses; en 2024 imágenes satelitales analizadas y difundidas por el think-tank CSIS ofrecieron más detalles de la envergadura del esfuerzo chino. Las infraestructuras de supuesta escucha están en el área de La Habana, la parte más próxima a Florida, y en la región sureste donde se halla la base de Guantánamo.

La ofensiva de la Administración Trump contra sus vecinos, esta vez México, tiene también su foco en el fentanilo. El interés en reducir el impacto su impacto en las muertes por sobredosis que se registran en EEUU pone de relieve la diversificación del narcotráfico de los carteles mexicanos. Otra vía de diversificación es la apuesta de algunos carteles por el comercio —es este caso no de estupefacientes, pero

igualmente al margen de la ley—del aguacate, un producto que ha multiplicado enormemente su producción en los últimos años debido a la gran demanda desde Estados Unidos: la jornada de la Super Bowl de 2024 marcó un récord en el consumo de aguacate en ese país. El sector mueve más de 3.000 millones de dólares anuales en México y se concentra especialmente en el estado de Michoacán. En su producción operan grupos como Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Los Viagras y Caballeros Templarios; estas organizaciones criminales cobran cuotas a los agricultores, controlan rutas de transporte y suministros y coaccionan a los gobiernos locales. Los productores han organizado grupos de autodefensa para hacer frente a la

situación, pero eso no ha impedido que individuos y familias marchen a otras tierras.

La violencia derivada de los grupos armados se ha recrudecido en Colombia en los últimos meses. Atravesado el ecuador de su mandato, Gustavo Petro tiene que constatar que su propuesta de Paz Total con la que pomposamente llegó a la presidencia colombiana no solo no se ha abierto camino, sino que no ha evitado el estallido de un conflicto en la región del Catatumbo, en la zona fronteriza con Venezuela. Allí enfrentamientos entre el ELN, disidencias de

las FARC y el Ejército han provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas, reeditándose situaciones que se creían superadas con el acuerdo de paz de 2016. El presidente Iván Duque fue ineficiente en la implementación del histórico acuerdo y Petro creyó que él podía ir incluso más allá. En realidad, el problema ha ido hacia atrás: Petro ha reducido el número de efectivos y las capacidades del Ejército colombiano y ahora se encuentra con dificultades para su despliegue efectivo.

Si las cuestiones de seguridad ciudadana constituyen un serio lastre en el desarrollo nacional y regional americano, los avances que se registran, aunque muchas veces sean reducidos, deben destacarse. En los primeros meses del sexenio de la primera mujer que preside México, Claudia Sheinbaum, el número de feminicidios en el país han bajado ligeramente tras haber rayado los mil anuales en el mandato de su antecesor. La guerra a los cárteles de Calderón conllevó un alza de los homicidios en general; los femicidios en particular bajaron con Peña Nieto y luego ambas estadísticas empeoraron con López Obrador. No obstante, el arraigado machismo de la sociedad mexicana, agravado con los códigos de los narcotraficantes, dificulta un serio progreso. ●

Panamá aparta a China del istmo ante las fuertes presiones de Estados Unidos

La rápida respuesta del gobierno panameño para minimizar las relaciones con Pekín no ha ablandado la dura postura de Trump sobre el Canal

° El fondo estadounidense BlackRock ha firmado la compra de la sociedad hongkonesa que explota los dos principales puertos de la vía interoceánica.

° El presidente Mulino ha sacado al país de la Ruta de la Seda y ha apartado a las empresas chinas de la construcción de un gran puente y del trazado de una línea férrea.

° Washington también tiene la vista en la concesionaria de la mayor mina de Panamá, que supone un 5% del PIB y cuyo principal accionista es chino.

GABRIELA RODRÍGUEZ

La fijación de Donald Trump con el Canal de Panamá responde, de entrada, a una preocupación geopolítica normal de Washington. La creciente presencia del rival chino en un punto especialmente estratégico para la seguridad —económica y militar— de Estados Unidos hace innegociable para este país apartar a Pekín de las orillas del Canal. Las [suspicias](#) habían ido en aumento y el Pentágono lo venía [advirtiendo](#) los últimos años en sus comparecencias ante el Congreso; ahora Trump ha convertido esto en una prioridad.

Además de ser uno de los estrechamientos más importantes en las rutas marítimas del planeta, por el que pasa el 5% del comercio internacional, para Estados Unidos constituye una [conexión vital](#) entre sus costas atlántica y pacífica y con el resto del mundo: el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos pasa por el canal; si además se tienen en cuenta todos los barcos que van a puertos estadounidenses o parten de ellos, esa cifra se eleva entonces al 72%.

El gobierno panameño, bajo la presidencia de José Raúl Mulino, en el cargo desde julio de 2024, se ha movido con celeridad: abrió una revisión de la concesión de los dos principales puertos del canal a una sociedad de Hong-Kong, ha anunciado la salida de Panamá de la Ruta de la Seda y ha cerrado la puerta de la intervención

china en la construcción de un nuevo puente sobre el canal, así como a la inversión de ese país en un proyecto de trazado ferroviario. Siguen otros intereses chinos en Panamá, pero las acciones ya tomadas debieran tranquilizar a Washington, si es que eliminar la amenaza de la influencia china en el istmo era el objetivo de la presión de Trump.

Puertos

La principal inquietud expresada por Estados Unidos se refiere a la gestión de los dos mayores puertos del país, el de Cristóbal y el de Balboa, situados en la boca atlántica y en la pacífica, respectivamente, del Canal. Su gestión fue otorgada en 1997 a la compañía hongkonesa Hutchison, con una cesión de 25 años cuya renovación entró en vigor en 2022. Si durante todo este tiempo nadie vio esa adjudicación como un riesgo, el ascenso de China y su rivalidad con EEUU la ha convertido en algo observado con desconfianza desde Washington.

No es solo que, de acuerdo con la legislación interna de la potencia comunista, las empresas chinas deban seguir los intereses nacionales también en el exterior (los puertos de empresas chinas podrían verse obligados a acoger barcos de guerra chinos o impedir el traque de países rivales), sino que bastaría [cualquier disrupción](#) en las bocas del canal, camuflada como algo accidental, para impedir que la Armada estadounidense pudiera mover sus capacidades

entre un océano y otro, lo que sería catastrófico en una crisis.

En atención a la disconformidad expresada por la Administración Trump, el presidente Mulino anunció que abría una revisión de la concesión otorgada a Hutchison. Difícil era encontrar algún incumplimiento por parte de la concesionaria, por lo que una ruptura de contrato le habría resultado cara al gobierno panameño. La solución vino desde Estados Unidos, cuando el 4 de marzo el fondo de inversiones BlackRock, uno de los mayores del mundo, anunció que había llegado a un [acuerdo](#) con la empresa hongkonesa para adquirir los 43 puertos que opera fuera de China, en 23 países. Como parte de ese acuerdo, BlackRock pasará a tener el 90% de Panama Ports Company, de la que dependen los puertos de Cristóbal y Balboa.

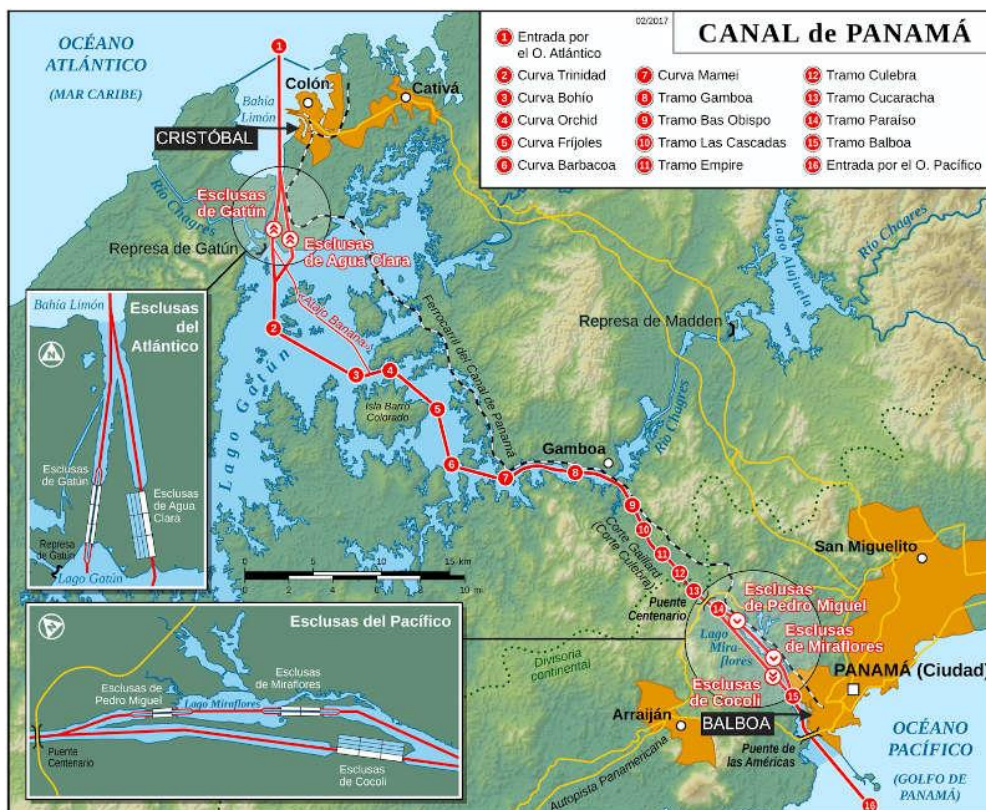
Un mes antes, coincidiendo con la visita a Panamá de Marco Rubio, en su primer viaje al exterior como nuevo secretario de Estado norteamericano, el gobierno panameño hizo saber que abandonaba su participación en la Ruta de la Seda, un programa de financiación de infraestructuras y conectividad. Panamá firmó su adhesión a la iniciativa china en 2017,

unos meses después de romper relaciones diplomáticas con Taipéi y establecerlas con Pekín. Fue el primer país latinoamericano en sumarse a la Ruta y ha sido también el primero en dejarla.

China ha expresado sus [quejas](#) por la operación que afecta a Hutchison y llamó al embajador panameño en Pekín para trasladar el malestar chino por las decisiones que está tomando el gobierno de Mulino. Este, al margen de los partidos tradicionales del país, ha dado un giro a las aproximaciones a Pekín realizadas por sus dos antecesores, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo.

Tren, puente y mina

Otra decisión en la misma dirección tomada por Panamá ha sido prescindir de cualquier participación china en la línea férrea que el gobierno quiere construir entre Ciudad de Panamá y la población de David, cerca de la frontera con Costa Rica, país al que cabría extender la vía. Mulino anunció la [contratación](#) de AECOM, una compañía “100% estadounidense”, como la definió, para supervisar la realización del proyecto, valorado



Mapa del Canal de Panamá [Autoridad del Canal]. Señalados, los puertos de Cristóbal y Balboa

en 4.000 millones de dólares. “Espero que ningún chino se asome por allí”, dijo.

Asimismo, el gobierno espera sustituir a dos importantes constructoras chinas, CHEC y CCCC, en el tendido de un nuevo puente sobre el canal de Panamá, en un proyecto de 1.400 millones de dólares cuya ejecución ha conocido ya varios retrasos. La nueva percepción hacia China podría también afectar a la localización de la nueva embajada de la República Popular, que había solicitado poder levantarla justo al lado del Canal.

Obras que China ya ha realizado en Panamá [incluyen](#) un puerto para cruceros y un centro de convenciones en el área Amador de la capital (que construyó, pero no gestiona). Dispone también de intereses en Isla Margarita, en la entrada atlántica al canal, y en la Zona Libre de Colón. Además, Huawei ha hecho del istmo panameño su ‘hub’ para Centroamérica.

Al margen de las instalaciones en la cercanía del Canal, los chinos también están presentes en la minería, con una participación sustancial en la mayor mina de cobre del país, una explotación a cielo abierto que venía aportando casi el 5% al PIB panameño. Acusaciones de falta de transparencia en la renovación del contrato llevaron a su anulación en 2023 por parte de la

Corte Suprema. La concesión la tiene la canadiense First Quantum Minerals, si bien la compra del 18,3% de esta por parte de la china Jiangxi Copper convierte a los chinos en los principales accionistas.

El presidente Mulino ha dado entender que quiere desbloquear la explotación de esa mina y no se descarta que propicie algún movimiento de inversores para que haya una reestructuración accionarial que responda mejor a la mayor sensibilidad de Washington. Si bien en principio la propiedad de la minera no pone en riesgo en modo alguno la seguridad del Canal para EEUU, hay quien interpreta que una empresa con una actividad de tanto peso en la economía panameña puede ejercer una gran influencia política.

Los pasos dados por las autoridades panameñas para reducir la presencia china no han evitado, sin embargo, que Trump insista en la devolución del canal. Aunque algunas voces consideran [equivocada](#), por tanto, una estrategia de concesiones que no ha servido para aplacar a Washington, cabe argumentar que para torcer cualquier tentativa sería por parte de Estados Unidos de recuperar la gestión de la vía interoceánica, en cualquier caso, primero había que proceder a quitar de en medio los intereses chinos. ●

Trump exige una ‘relectura’ de la neutralidad del Canal de Panamá

La insistencia en recuperar la vía interoceánica siembra dudas sobre si un acomodo que dé trato de favor a EEUU en el canal en realidad saciará a Trump

° *Tras su primer viaje oficial, realizado a Panamá, Marco Rubio dijo haber pactado el tránsito sin peaje para la Navy, algo negado por el gobierno panameño.*

° *La gratuidad para los barcos de guerra estadounidenses podría justificarse en el mandato que tienen EEUU y Panamá de garantizar la seguridad en la navegación.*

° *Otras excepciones, como un precio más bajo para las mercancías vinculadas a EEUU, no cabrían en el actual Tratado, que solo prevé excepciones para Colombia y Costa Rica.*

LAIS SUASSUNA

Desde su reelección, Donald Trump ha puesto sus ojos en el Canal de Panamá. En su toma de posesión, el 21 de enero de 2025, el presidente estadounidense fue [explícito](#): “La promesa que nos hizo Panamá se ha roto. El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado se han violado por completo. Los buques estadounidenses están pagando precios muy excesivos y no reciben un trato justo de ninguna manera. Y eso incluye a la Armada de Estados Unidos. Y, sobre todo, China opera el Canal de Panamá. Y no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo estamos recuperando”.

El hecho de que tras algunas concesiones realizadas después por el gobierno panameño (como propiciar un cambio de manos en la gestión de los dos principales puertos del canal, hasta ahora operados por una empresa china, y la salida del país centroamericano del acuerdo de la Ruta de la Seda que le vinculaba a Pekín), Trump siga persistiendo en su amenaza (como hizo ante la [sesión conjunta](#) del Congreso el 4 de marzo), hace dudar sobre si el maximalismo de recuperar el canal es meramente retórico o en verdad el presidente estadounidense piensa llegar hasta el final (un final que no sería pacífico). Ha trascendido que la Casa Blanca ha pedido al Pentágono que elabore planes para asegurar el ‘acceso’ de EEUU al Canal.

Es previsible que Panamá, así como ha buscado satisfacer a Estados Unidos en relación con la presencia china, dé también algunos pasos para otorgar un trato preferencial a los estadounidenses en su tránsito por el Canal. La cuestión es cómo llegar a eso a la luz de los tratados vigentes.

Los Tratados Torrijos-Carter, firmados entre el presidente panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter en 1977, consisten en dos documentos: el [Tratado del Canal de Panamá](#) y el [Tratado de Neutralidad](#) (‘Tratado concerniente a la neutralidad permanente del Canal y al funcionamiento del Canal de Panamá’). El primero fijó los términos y la fecha para la transferencia del control del Canal de Estados Unidos a Panamá, mientras que el segundo reforzó el concepto de neutralidad permanente del Canal, garantizando su acceso a todos los buques en condiciones justas y equitativas. Estos acuerdos, consumados del todo con el pase de la soberanía del canal a Panamá a finales de 1999, marcaron un hito en la historia, la política y las relaciones exteriores entre los dos países.

El Tratado de Neutralidad establece en su primer artículo que «el Canal, como vía de tránsito internacional, será permanentemente neutral de conformidad con el régimen establecido en este Tratado». Desde su ratificación, ambos países signatarios han

respetado plenamente sus derechos y obligaciones en virtud del tratado. Washington nunca había acusado a Panamá de no respetar una neutralidad que ahora EEUU sugiere ver amenazada por la presencia de intereses chinos en ese país. Aunque en modo alguno había base legal para que la Casa Blanca denunciase el incumplimiento del acuerdo y reclamara la devolución del canal, el distanciamiento respecto a China que está llevando a cabo el gobierno panameño elimina cualquier pretexto en ese sentido.

Excepción para Colombia y Costa Rica

Si bien la neutralidad se refiere a aspectos de seguridad, también cabría entenderla como un compromiso a no favorecer a ninguna nación sobre otras. El artículo II del Tratado de Neutralidad dice: “Panamá declara la neutralidad del Canal para que, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, este permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad, de modo que no haya contra ninguna nación ni sus ciudadanos o súbditos discriminación concerniente a las condiciones o costes del tránsito ni por cualquier otro motivo”.

Sin embargo, ese mismo Tratado da trato de favor a [Colombia y Costa Rica](#), los vecinos al sur y al norte de Panamá. Colombia, de la que formaba parte el territorio panameño hasta 1903, ya obtuvo de EEUU desde el principio la gratuidad en el uso del canal para sus barcos de guerra y sus productos. El Tratado Torrijos Carter dejó expresamente la puerta abierta a que Panamá mantuviera ese privilegio para Colombia e introdujo la posibilidad de hacer lo mismo para Costa Rica.

Concretamente, el punto 2 del artículo VI del Tratado de Neutralidad dice: “Los Estados Unidos de América, mientras sea responsable de la operación del Canal, podrán continuar otorgando a la República de Colombia el derecho de tránsito gratuito a través del Canal para sus tropas, buques y material de guerra. Posteriormente, la República de Panamá podrá otorgar a la República de Colombia y a la República de Costa Rica el derecho de tránsito gratuito”. Ambos países firmaron con Panamá (los colombianos en 1979 y los tarricenses 1980) sendos tratados bilaterales desarrollando esa

Principales 15 Países por Flujo de Carga (Toneladas Largas)						
País	Origen	Destino	Costa a Costa	Total	Total Menos Carga de Costa a Costa	%
Estados Unidos	99.627.938	57.434.100	3.059.031	160.121.069	157.062.038	74,7%
China	23.801.407	21.241.347		45.042.754	45.042.754	21,4%
Japón	5.292.370	25.437.768		30.730.138	30.730.138	14,6%
Corea del Sur	11.330.537	8.338.453		19.668.991	19.668.991	9,4%
Chile	7.803.167	9.620.743		17.423.910	17.423.910	8,3%
México	7.298.569	10.015.580	411.793	17.725.942	17.314.148	8,2%
Perú	6.062.353	9.643.313		15.705.666	15.705.666	7,5%
Ecuador	5.720.572	7.457.635		13.178.206	13.178.206	6,3%
Colombia	4.268.356	5.829.470	248.990	10.346.816	10.097.826	4,8%
Panamá	603.942	9.290.076	31.364	9.925.382	9.894.018	4,7%
Guatemala	757.859	6.719.994	8	7.477.860	7.477.852	3,6%
Canadá	3.215.769	1.705.872	196	4.921.837	4.921.641	2,3%
España	2.338.919	1.563.981		3.902.900	3.902.900	1,9%
Taiwan	2.254.773	1.250.955		3.505.728	3.505.728	1,7%
Brasil	1.704.664	1.754.026		3.458.690	3.458.690	1,6%

El porcentaje de participación de cada país es calculado desde la perspectiva de origen y destino de la carga, los porcentajes de la derecha no deben sumarse ya que se incurriría en un doble conteo [Autoridad del Canal]

cuestión, que incluye tanto el transporte militar como el comercial.

Las únicas excepciones contempladas en el Tratado son para esos dos países, por lo que cualquier ventaja que Panamá pueda acabar concediendo a Estados Unidos en relación con el precio de los peajes de tránsito por el canal – desde luego en cuanto al transporte de mercancías— habría posiblemente que contemplarla en un nuevo tratado. El hecho de que el tratado vigente discrimine unos países de otros, por razones históricas y de vecindad, supone una lógica que muy bien podría ampliarse a Estados Unidos si se llegara a ese acuerdo en un nuevo documento.

Buques de guerra

No obstante, basándose en el presente tratado, sin necesidad de reforma, quizá cabría que Panamá dejara de cobrar peaje a los barcos de guerra de Estados Unidos, pues el punto 1 del ese mismo artículo VI da a EEUU la responsabilidad de garantizar la seguridad del Canal: “En reconocimiento de las importantes contribuciones de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América a la construcción, funcionamiento, mantenimiento, protección y defensa del Canal, las naves de guerra y las naves auxiliares de estas naciones, no obstante

otras estipulaciones de este tratado, tendrán el derecho de transitar el Canal independientemente de su funcionamiento interno, medio de propulsión, origen, destino, armamento o carga. Dichas naves de guerra y naves auxiliares tendrán derecho de transitar el Canal de modo expedito”.

Precisamente eso es lo que solicitó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante su visita a Panamá de comienzos de marzo de 2025, en su primer viaje oficial al extranjero. El Departamento de Estado anunció después haber logrado ese objetivo –Rubio argumentó que “es absurdo que tengamos que pagar tasas para transitar por una zona que estamos obligados a proteger en tiempos de conflicto”–, pero el presidente panameño, José Raúl Mulino, [rechazó](#) estas afirmaciones asegurando que no había habido ningún acuerdo al respecto.

Según la Administración Trump, si la exención fuera aplicada, Estados Unidos se ahorraría millones de dólares al año. Sin embargo, en los últimos 26 años, solo 994 cruces corresponden al paso de buques y submarinos de la Armada de EEUU, lo que representa 25,4 millones de dólares recaudados en peajes (menos de un millón al año).

Buena gestión e inversión propia

Durante los últimos 25 años, la administración del Canal bajo soberanía panameña ha

demostrado una [eficiencia excepcional](#). Bajo la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), las operaciones han mejorado significativamente, con tiempos de tránsito más cortos, menos accidentes y una importante ampliación en 2016. Estados Unidos, como principal usuario del canal, se ha beneficiado de esas mejoras sin asumir los costos de mantener el control colonial y permitiéndole mostrar buena voluntad hacia el vecindario latinoamericano. Los problemas causados por la [sequía](#) en 2023, que obligaron a reducir el volumen de cargas en tránsito, han sido superados con propuestas de mejora en caso de acentuarse los efectos negativos del cambio climático.

La ampliación del Canal de Panamá, finalizada en 2016, tuvo un costo aproximado de 5.250 millones de dólares, aportados por Panamá y los inversores que logró implicar, lo que la convierte en el mayor proyecto de infraestructura en la historia del país desde la construcción original del canal. Esta expansión incrementó significativamente los ingresos que obtiene Panamá, así como su influencia en el comercio internacional.

Cuando Trump reclama la devolución del Canal a Estados Unidos, podría responderse que aquel canal que EEUU entregó en su día a Panamá ya no existe. ¿Tomaría Estados Unidos toda la nueva infraestructura que posteriormente construyeron los panameños, sin que hubiera ninguna aportación de Whashington? ●

Migración ‘reversa’: El Darién comienza a ver migrantes que vuelven hacia el Sur

La presión de Trump sobre Centroamérica no solo reduce el flujo hacia la frontera estadounidense, sino que además Panamá se convierte en ‘hub’ de devoluciones

◦ Desde diciembre de 2024, una vez elegido Trump, el número de personas que atravesaron hacia el Norte por el cuello de botella del Darién bajó en torno al 90%.

◦ Ya al llegar a la presidencia panameña en julio de 2024, José Raúl Mulino empezó un plan de deportaciones, pagadas por EEUU, de quienes atravesaban la selva desde Colombia.

◦ Mulino ha aceptado recibir migrantes devueltos por Washington para luego reenviarlos a sus lugares de origen, en medio de cuestionamientos sobre derechos humanos.

VIRGINIA GÓMEZ

Está por ver que la tendencia crezca y se mantenga, pues las causas que explican el intenso fenómeno migratorio subyacen, pero las propias autoridades a ambos del intrincado paso de la selva del Darién han detectado un flujo migratorio reverso, no hacia Estados Unidos, sino de vuelta desde su frontera. Las autoridades colombianas aseguran que en este comienzo de 2025 unas 200 personas están llegando diariamente desde Panamá, mientras que las de este país temen que la cifra llegue a las 5.000 en algunos picos diarios a lo largo de este año, según testimonios recogidos por el [WSJ](#).

Se trata de una dinámica nueva y un completo giro respecto a lo vivido en los últimos años, en los que el paso del Darién, antes un lugar infranqueable, se convirtió, aun manteniendo sus riesgos de todo tipo, en corredor que abría la migración a pie de Suramérica hacia el Norteamérica. Entre 2021 y 2023, más de 900.000 personas tomaron esa ruta. El [drástico aumento](#) del paso de personas por este punto de Centroamérica comenzó tras la pandemia de Covid 19: en 2021 los tránsitos se dispararon hasta los 130.000, en 2022 se alcanzaron los 250.000 y en 2023 se superaron los 520.000. Las restricciones aplicadas después redujeron la cifra a 302.000 en 2024 y en 2025 se espera un volumen aún mucho menor.

Esta selva panameña en su frontera con Colombia —el único punto que interrumpe la carretera Panamericana, de ahí el nombre de Tapón del Darién— es una vasta extensión pantanosa, históricamente casi impenetrable, que abarca 17.000 km². Allí se aglomeran grupos criminales y traficantes de personas que operan al margen de la ley, exacerbando la [vulnerabilidad](#) de los que buscan cruzarlo. Aquí, los migrantes no solo enfrentan la dureza del terreno y las condiciones climáticas extremas; la presencia de redes de tráfico, extorsión y violencia que añade una dimensión difícil de controlar y que desnuda las limitaciones estatales en la región

En años previos, el cruce del Darién era utilizado mayoritariamente por personas de otros continentes, especialmente de Asia y África, pero luego ha sido la ruta principal seguida por haitianos, cubanos y venezolanos a medida que las condiciones de vida en sus países se han deteriorado gravemente.

Mulino y Trump

La llegada de José Raúl Mulino a la presidencia de Panamá en julio de 2024 marcó un punto de inflexión, aún moderado. Su campaña electoral se centró en promesas de “cerrar el Darién” y contener el flujo migratorio mediante deportaciones masivas, una estrategia destinada, según el gobierno, a desincentivar a los

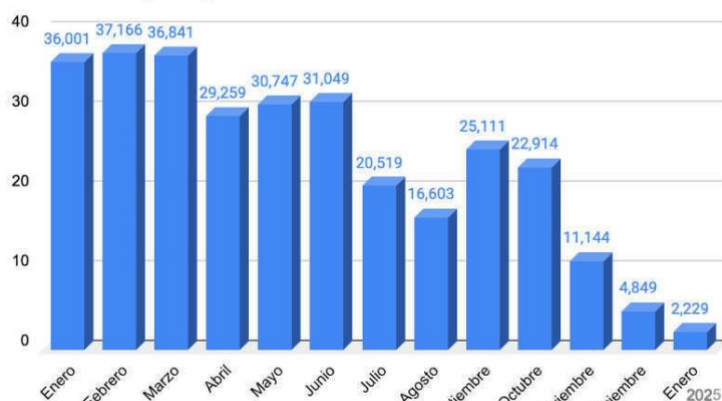
migrantes de usar esta ruta. Nada más asumir su cargo, el nuevo presidente firmó con EEUU un [programa](#) financiado por el Departamento de Estado norteamericano para deportar a migrantes que llegaban a Panamá tras atravesar el Darién, respondiendo con ello a la creciente presión política ejercida desde Washington para frenar la migración irregular.

Con la reelección de Donald Trump los esfuerzos de colaboración se redoblaron. Así, en las primeras semanas de Trump en la Casa Blanca, el Servicio Nacional de Migración panameño ejecutó siete vuelos de expulsión y deportación en colaboración con Estados Unidos, lo que resultó en una disminución histórica del 94 % en el ingreso de migrantes irregulares a Panamá en enero de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior, según destacó el SNM en sus [redes sociales](#). Ya el mes anterior, con Trump victorioso electoralmente pero sin haber entrado aún en la Casa Blanca, la reducción de entradas efectivas en Panamá había descendido un 80% respecto a diciembre de 2023. El temor a las políticas especialmente restrictivas anunciadas por Trump previno a muchas personas de emprender el camino hacia EEUU, y las que aun con todo se pusieron en marcha tuvieron que afrontar el riesgo de las repatriaciones operadas por las autoridades de Panamá.

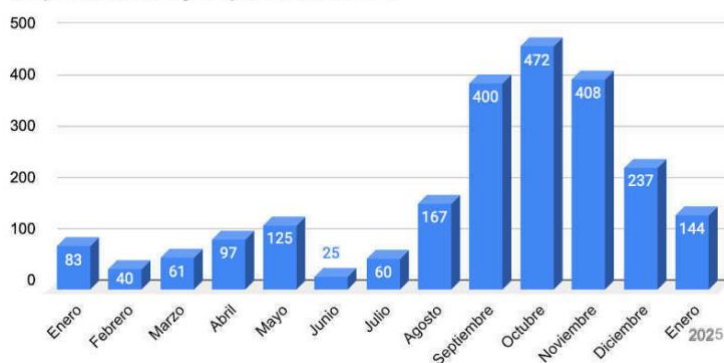
El propio Mulino ha declarado “[cerrado](#)” el paso del Darién, tanto por el claramente menor volumen de personas que llegan desde Colombia como por el consecuente cierre de las estaciones de recepción de migrantes establecidas a la salida de la selva. Los migrantes ‘reversos’ ya no atraviesan el difícil paso, ya que no deben avanzar en clandestinidad como en su viaje de ida, sino que en el regreso toman embarcaciones en Panamá para salvar el golfo de Urabá y llegar a Colombia.

A las deportaciones que hace el gobierno panameño desde su territorio se han sumado las que desde EEUU lleva a cabo la Administración Trump, remitiendo a Panamá migrantes de muy diversas nacionalidades que luego el país centroamericano debe reenviar a sus países de origen u otros lugares. Esta estrategia responde a la dificultad de Washington para deportar migrantes provenientes de países como Afganistán, Irán o China, debido a que las restricciones diplomáticas dificultan su

Tránsito irregular por el Darién 2024



Deportaciones y expulsiones 2024



Gráficos elaborados con datos procedentes de las [estadísticas](#) del Servicio Nacional de Migración de Panamá

repatriación. Panamá, en medio de las presiones de Trump relacionadas con el control del Canal, ha asumido el papel de eslabón clave en esta estrategia migratoria.

Deportaciones controvertidas

Esto ha provocado polémica internacional, especialmente por no considerarse la petición de asilo que muchos migrantes pensaban tramitar a su llegada a la frontera estadounidense. En lugar de evaluarse sus casos, son detenidos por la guardia fronteriza y por efectivos del Ejército, encadenados y trasladados en avión hasta Panamá. El destino de estos migrantes es incierto. Según el testimonio de un nutrido grupo, al llegar a Panamá vieron confiscados sus pasaportes, así como mayoritariamente sus móviles, y fueron encerrados en un hotel sin acceso a abogados, a la espera de ser enviados a un campamento improvisado en las afueras de la región del Darién, en la localidad de San Vicente. El 20 de febrero, las autoridades panameñas realizaron el primer traslado a ese centro de detención en el Darién, una medida

duramente criticada por medios internacionales debido a las condiciones precarias de estas instalaciones. Ante la controversia generada, el gobierno panameño finalmente [liberó](#) a estos migrantes, exigiéndoles abandonar el país en 30 días, si bien algunos de ellos aseguraron que volverían a intentar llegar a EEUU. Hasta principios de marzo, Washington había enviado a Panamá tres vuelos, con un total de 299 migrantes.

El gobierno de Mulino ha defendido su actuación, asegurando que la operación de traslado de EEUU a Panamá y estancia temporal en este país sería supervisada por organismos de la ONU, al tiempo que ha insistido en la validez de la externalización de la gestión migratoria llevada a cabo por Estados Unidos y que también se ha extendido a Costa Rica.

De todos modos, organizaciones internacionales advierten que estas medidas pueden violar el principio de ‘no devolución’, un derecho fundamental en la legislación internacional sobre refugiados, que prohíbe expulsar a personas a países donde su vida o libertad corran peligro. La ACNUR ha subrayado que muchos de estos migrantes podrían calificar

para protección internacional y que deportarlos sin evaluar sus casos vulnera sus derechos. El desafío para Panamá es que las deportaciones masivas no solo pueden resultar [ineficaces](#) al generar nuevas rutas migratorias, sino que también podrían aumentar los riesgos para los migrantes y deteriorar la seguridad en la región. Además, la retórica antiinmigrante podría alimentar actitudes xenóforas en el país y dificultar la integración de aquellos migrantes que, por diversas razones, terminan quedándose en Panamá.

Aunque solo un 3% los migrantes que hasta ahora cruzaban el Darién expresaban intención de quedarse en el país —la gran mayoría pretendía alcanzar EEUU; en menor medida, México o Canadá—, los nuevos obstáculos en el norte han generado un efecto de concentración en la región del Darién, la más pobre de Panamá. Hacer un año, ocho de cada diez [encuestados](#) asegura que, de no poder llegar a su meta, esperarían hasta que se les permitiera proceder. El 67 % de las personas haitianas y venezolanas entrevistadas reportaron no haber recibido ningún tipo de información sobre los nuevos requisitos de ingreso a Estados Unidos. ●

China consolida en Cuba las instalaciones para espiar a su gran rival desde su ‘patio trasero’

El cuartel general del Pentágono para Latinoamérica y el Caribe alerta sobre los esfuerzos de Pekín en la “recogida de información” desde la isla

° Las imágenes satelitales divulgadas por el CSIS en julio de 2024 ponen de manifiesto una creciente red de antenas chinas.

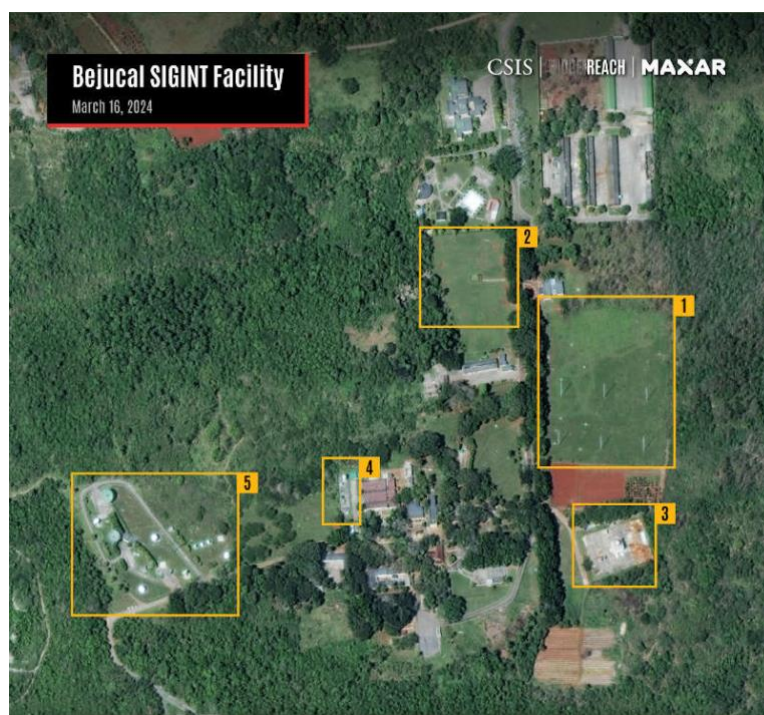
° La Casa Blanca ya confirmó un año antes la actividad espía del régimen chino, al menos desde 2019, si bien algunas instalaciones podrían datar ya de la década anterior.

° Las infraestructuras de supuesta escucha están en el área de La Habana, la parte más próxima a Florida, y en la región sureste donde se halla la base de Guantánamo.

GABRIELA RODRÍGUEZ

China ha seguido consolidando sus instalaciones en Cuba destinadas al espionaje de señales de Estados Unidos. Imágenes satelitales divulgadas a mitad de 2024 confirmaban una extensión de las infraestructuras de escucha que la potencia asiática ha ido estableciendo en la mayor de las Antillas, aumentando el grado de amenaza al que se acaba de referir el nuevo jefe del Comando Sur estadounidense. En su primera [comparecencia](#) ante el Congreso, en Washington, el almirante Alvin Holsey indicó el pasado mes de febrero que Pekín utiliza Cuba como “localización próxima [a EEUU] para la colección de inteligencia” y advirtió que el Southcom “prioriza el monitoreo y la evaluación de las actividades malignas” llevadas a cabo a solo 110 kilómetros de suelo estadounidense. Desde Cuba también podrían ponerse en riesgo comunicaciones relativas a la seguridad del tránsito por el Canal de Panamá.

La actividad de espionaje de China sobre Estados Unidos ya ocupó la actualidad a comienzos de 2023 con el avistamiento de un [globo chino](#) sobrevolando territorio estadounidense, luego derribado en el mar. Pero la denuncia sobre un esfuerzo de Pekín por interceptar señales de comunicaciones estratégicas de EEUU cobró mayor gravedad con una [información](#) publicada el 8 de junio de 2023



Instalaciones coordinadas para la captación de señales en las proximidades de Bejucal [CSIS]

por el ‘Wall Street Journal’, según la cual China y Cuba habían llegado a un acuerdo para la construcción de una base de espionaje en la isla. A cambio, el régimen chino se había comprometido pagar varios miles de millones de dólares, en un momento de especial penuria económica cubana. El WSJ afirmaba que el

acuerdo presuntamente incluía crear también una base para entrenamiento militar conjunto.

La primicia fue [confirmada](#) dos días después, en términos generales (habló de “inexacto”), por la Casa Blanca, que ante algunas acusaciones sobre una aparente debilidad de la Administración Biden quiso precisar que en Cuba ya había instalaciones chinas de espionaje al menos desde 2019 (por tanto, durante la Administración Trump).

Imágenes satelitales

No hubo más detalles al respecto hasta que el 1 de julio de 2024 el Center for Strategic and International Studies (CSIS), uno de los principales think-tanks de Washington, publicó un [informe](#) con imágenes de satélite que desvelaban la existencia de hasta cuatro emplazamientos de instalaciones espías de China en Cuba para la captación de señales de inteligencia (SIGINT), varias de ellas especialmente sofisticadas.

De acuerdo con ese informe, tres de los emplazamientos localizados se encuentran en las cercanías de La Habana (Bejugal, Wajay y Calabazar), mientras que el otro se halla próximo a El Salao, a unos 100 kilómetros de la base estadounidense de Guantánamo. Algunas de las instalaciones, comparándolas con fotos previas, se observaban en construcción, y tanto en Bejugal como en El Salao se apreciaba el diseño de una configuración de antenas parabólicas conocido como Circularly Disposed Antenna Array (CDAA): antenas dispuestas circularmente

que, en su comunicación, son altamente efectivas en determinar el origen y la dirección de las señales de alta frecuencia detectadas.

Según las imágenes facilitadas, el emplazamiento más desarrollado era el de Bejugal, acerca del cual, en su progresiva construcción, ya apareció mencionado en informaciones publicadas en 2017 y 2018, además de que a él se refirió vagamente el actual secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en unas declaraciones de 2016 como senador especialmente atento a la actualidad cubana. Se trata del lugar que fue el epicentro de la crisis de los misiles de 1962, pues ahí se habían almacenado las armas nucleares que la URSS había llevado secretamente a la isla.

Es posible, como sugiere el informe del CSIS, que varias de esas instalaciones comenzaran a construirse desde comienzos de siglo, si bien una mayor operatividad no habría sido alcanzada hasta los años mencionados. En el caso de El Salao, el salto cualitativo se habría dado en 2021.

En brazos de China

Las informaciones que vinculan a China con las instalaciones SIGINT en Cuba han sido rechazadas por los funcionarios chinos. Por su parte, el gobierno de Miguel Díaz-Canel, basándose en un [acuerdo](#) de la CELAC de 2014 que declara a América Latina y el Caribe como una ‘zona de paz’, niega la existencia de un pacto militar con China.

La inteligencia estadounidense no tiene dudas de que se trata de tecnología operada por China.



Una de las antenas instaladas en Bejugal

Cuba no dispone de satélites propios que permitan el aprovechamiento de los sistemas instalados. Por otra parte, frente a una Rusia con menor fuelle financiero, China está dispuesta a un pago generoso por unas capacidades de espionaje en la máxima proximidad posible de Estados Unidos que le resultan importantes en su rivalidad con Washington. Para el gobierno del PCC, esa presencia en Cuba podría representar una manera de contrarrestar la presión estadounidense en el Mar de China Meridional: el Caribe es el mar meridional de Estados Unidos y la ‘injerencia’ de ese país en Taiwán se ve replicada por la de Pekín en Cuba.

Las graves dificultades económicas que sufre la isla caribeña han empujado al régimen castrista a intentar buscar un [nuevo salvavidas](#) exterior. Si la caída de la URSS situó a Cuba en un ‘periodo especial’ de gran miseria, el fin de la sustantiva ayuda que luego ha prestado Venezuela y la frustración del benefactor acuerdo con la Administración Obama han exacerbado las deficiencias del sistema económico cubano arrojando al os cubanos a un [nuevo periodo especial](#). Ante esta situación crítica, que en realidad ameritaría serias reformas, el gobierno de Miguel Díaz-Canel se atrincheró abogando por poner nuevamente en práctica las estrategias de la Guerra Fría.

El Southcom alerta

La revista ‘Diálogo’, la publicación divulgativa del Comando Sur, insistió en la cuestión de las antenas chinas en septiembre de 2024, asegurando que China “[expande](#)” su red de

espionaje en Cuba, aunque sin nueva información específica respecto a la aportada meses antes por el CSIS. La publicación menciona el informe ‘Evaluación Anual de Amenazas’, de la oficina del director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, publicado en febrero del año pasado, donde se alerta sobre los planes del Ejército Popular de Liberación de China de establecer bases militares en el extranjero, incluyendo Cuba.

El tono del señalamiento de la amenaza que supone China para EEUU en la región se vio incrementado en la comparecencia del jefe del Southcom ante el Congreso (en esta ocasión ante el Senado) el 13 de febrero de 2025. El almirante Alvin Hosley indicó que Latinoamérica y el Caribe “está en la primera línea de una contienda decisiva y urgente para definir el futuro de nuestro mundo”. “China está atacando los intereses de Estados Unidos desde todas las direcciones, en todos los dominios, y cada vez más en el archipiélago caribeño, una cadena de islas potencialmente ofensiva”, agregó. Según indicó, “mientras Estados Unidos mira hacia el Lejano Oriente, China está arando terreno fértil en nuestro sur”; así que no se logra “competir adecuadamente aquí y ahora”, la región quedará bajo influencia de “los principales rivales autoritarios de Estados Unidos”.

De todos modos, el tono y las maneras utilizadas por la nueva Administración Trump en su relación con sus vecinos latinoamericanos no marca una voluntad de competir “adecuadamente” por ganar una influencia positiva en la región. ●

El Tren de Aragua se establece como grupo transnacional, de Chile a Canadá

La declaración de organización terrorista por parte de la Administración Trump responde a la extensión y brutalidad de la organización delictiva

° *El asesinato en Chile del exteniente venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024, pudo haber estado encargado por el ministro del Interior chavista, Diosdado Cabello.*

° *Existe una confluencia de intereses entre el Tren de Aragua y el régimen de Maduro, si bien solo se han detectado algunos “vínculos funcionales” entre ambos.*

° *La captación de no venezolanos, la franquicia de grupos locales y el no suministro de antecedentes penales por parte de Caracas dificulta calibrar la realidad del grupo.*

EMILI J. BLASCO

En la recta final de la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en los meses de septiembre y octubre de 2024, ningún otro grupo delictivo tuvo en los mensajes y debates políticos el protagonismo del Tren de Aragua, mencionado con frecuencia por Donald Trump como epítome de los males de una inmigración descontrolada. Extendido por Latinoamérica y presente también en Estados Unidos aprovechando la creciente diáspora venezolana, la brutalidad del Tren de Aragua (TdA) en sus acciones le ha colocado en poco tiempo al nivel de los principales grupos transnacionales de crimen organizado en la región.

De acuerdo con la promesa electoral, en su primer día en la Casa Blanca Trump firmó un orden ejecutiva designando al TdA, junto con la mara Salvatrucha de El Salvador, como [organización terrorista extranjera](#). Un mes después, el Departamento de Estado añadió a esa lista a los seis mayores carteles de narcotráfico mexicanos. La designación internamente faculta a las autoridades estadounidenses a atacar a esos grupos fuera de las propias fronteras, si bien de ocurrir habría serias complicaciones diplomáticas y de derecho internacional con los países vecinos.

Además de un pronto confinamiento de supuestos miembros del TdA en Guantánamo, las autoridades estadounidenses enviaron el 16

de marzo a 238 venezolanos a El Salvador, para su internamiento en la prisión de máxima seguridad construida por Nayib Bukele en su combate a las maras. El envío de la mayor parte de esos presos (en muchos casos sin evidencias de pertenencia a organización delictiva y aparentemente sin problemas previos con la Justicia) en [polémica aplicación](#) de una ley del siglo XVIII contra enemigos en situación de guerra ponía a la Administración Trump en conflicto con los tribunales.

Origen en la cárcel de Tocarón

El TdA nació hacia 2004 en la cárcel de Tocarón, en el estado venezolano de Aragua. Entre 2015 y 2018 se convirtió en la mayor banda delictiva del país. Con la diáspora venezolana, que desde 2018 suma casi 8 millones de personas, el TdA se ha extendido por la región —sobre todo a Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos— constituyendo una red transnacional con células propias, con incorporación también de no venezolanos y con la venta de franquicias a elementos o grupos locales.

Una reciente [investigación](#) de Douglas Farah y Pablo Zeballos, destaca cómo el TdA ha crecido como ‘exoesqueleto’ de la migración venezolana: emigrando con sus connacionales, los miembros del TdA pronto vandalizaron algunas de las rutas de salida, así como el entorno de los migrantes en sus lugares de



Violencia de supuestos miembros del Tren de Aragua en un bloque de viviendas en Aurora, Colorado [CCTV]

tránsito o llegada. Explotan “las vulnerabilidades jurídicas y económicas de las comunidades de la diáspora”; muchos son jóvenes varones que ven en la actividad delictiva “una vía para alcanzar independencia económica y protección frente a otras pandillas o a las instituciones del país de acogida”, dice la investigación. La extrema violencia es utilizada para intimidar a las comunidades y también para atraer a grupos locales que quieran identificarse como parte del TdA a cambio entregar parte de sus ganancias ilícitas. El grupo es responsable de homicidios, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, explotación sexual de menores y extorsión.

Asesinato clave en Chile

El secuestro el 21 de febrero de 2024 en Santiago de Chile de Ronald Ojeda, teniente que había desertado del ejército venezolano, supuso una voz de alerta sobre las capacidades transnacionales desarrolladas ya por el TdA, así como sus posibles vínculos con el chavismo. Unos días después el cuerpo de Ojeda fue hallado dentro de una maleta, desmembrado y enterrado bajo metro y medio de hormigón. Las [denuncias](#) del Gobierno chileno sobre una posible participación directa del régimen de Nicolás Maduro en el asesinato (lo que, por tanto, constituiría una actuación criminal del gobierno de un país en un espacio soberano de otro) han sido después documentadas por los fiscales, que cuentan con declaraciones de testigos y otras evidencias señalando a Diosdado

Cabello, ministro de Interior de Venezuela, como la persona que presuntamente encargó la operación al líder del TdA (Héctor Guerrero, conocido como ‘Niño Guerrero’, quien habría ordenado el trabajo a la facción de Los Piratas).

Esta causa judicial y el trabajo de la Fiscalía en el norte de Chile, en el área de Arica, donde prontamente se instaló el TdA, han permitido recabar información sobre la composición y ‘modus operandi’ de la organización, que tiene una estructura jerárquica en las decisiones estratégicas, pero plana en cuanto a la ejecución de operaciones. De todos modos, la no colaboración de las autoridades venezolanas — especialmente notoria es su falta de interlocución con Estados Unidos— ofreciendo datos sobre sus antecedentes penales, dificulta la identificación de los miembros del TdA; para determinar su extensión tampoco ayuda el régimen de franquicias usado o que haya criminales que digan pertenecer al grupo solo por buscar notoriedad.

En cualquier caso, como refiere el informe antes citado, en Chile se han identificado unos 350 miembros asociados al TdA, muchos ya en prisión preventiva o cumpliendo condenas. Entre las causas que tramita, Chile ha pedido la extradición de Larry Álvarez Núñez, alias Larry Changa, cofundador del TdA en Tocarón y detenido en Colombia; así mismo, planea la extradición de algunos miembros de Los Piratas, detenidos en Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Actividades de la banda se han

detectado en la mayor parte de los países americanos; EEUU ha firmado un [acuerdo](#) con Canadá para hacer frente a los delincuentes.

Conexión con Maduro

El grado de vinculación del TdA con la cúpula dirigente bolivariana de Venezuela ha sido objeto de debate. Aunque la desestabilización que la criminalidad del grupo genera en las sociedades vecinas puede contribuir a los intereses del gobierno en Caracas, con la información que de momento existe habría que afirmar que probablemente se trata de tenues relaciones de conveniencia, las cuales adquieren un compromiso específico en operaciones puntuales.

La relación ha sido señalada por la Administración Trump a la hora de argumentar la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para la expulsión de supuestos miembros del TdA. “A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a TdA. El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, lo que representa un peligro sustancial para este país”, aseguraba la [orden ejecutiva](#) de la Casa Blanca.

Expertos como Farah y Zeballos hablan solo de “algunos vínculos funcionales”. Más allá de algunos encargos, como el del asesinato de Ojeda, se trataría de una conjunción de intereses comunes, ya que “la función del TdA para el régimen de Maduro se entiende mejor como parte de una serie de tácticas asimétricas, de bajo costo y bajo riesgo, que el régimen emplea para desestabilizar la gobernanza democrática” de otros países. Por un lado, Maduro estaría utilizando la migración masiva como arma asimétrica (como la Turquía de Erdogan habría hecho con los refugiados sirios para aumentar su presión negociadora sobre la UE), y por otro, se beneficiaría de la delincuencia del TdA para desgastar el tejido económico y social de países institucionalmente más estables y alimentar así discursos populistas y soluciones autoritarias que vendrían a ‘normalizar’ la excepcionalidad que hoy es Venezuela. Al mismo tiempo, atemorizar

a los disidentes fuera de las fronteras venezolanas o incluso disuadir de emigrar a quienes piensan hacerlo por miedo a ser objeto de extorsión o trata de personas por grupos como el TdA también resulta en ventaja de Maduro.

Patrocinio del estado

Una mayor vinculación es la que estima Joseph Humire en un [análisis escrito](#) para Heritage Foundation, donde se refiere al TdA como “organización criminal patrocinada por el estado que nació de las políticas del gobierno venezolano, las cuales mezclan al Estado con las redes criminales”. Entre los vínculos, Humire cita un chat que se intervino a los llamados “narcosobrinos” (los dos sobrinos de Maduro implicados en narcotráfico detenidos en 2015 por EEUU, liberados por la Administración Biden a pesar de la condena a 18 años de cárcel), en el que se daba la impresión ya entonces de usar elementos del TdA como sicarios. Humire también advierte que uno de los sospechosos en el asesinato de Ojeda, Walter Rodríguez Pérez, trabajó previamente como escolta de Tareck el Aissami cuando este era ministro del Interior. Asimismo, se destacan posibles vínculos, al menos históricamente, de Iris Varela, hoy vicepresidenta de la Asamblea Nacional y durante casi una década ministra de Prisiones, bajo cuyo mandato el TdA creció en la cárcel de Tocarón.

De todos modos, aunque Humire utiliza la expresión “state-sponsored” para definir al TdA, no establece una habitual coordinación entre esta organización y el gobierno venezolano; las conexiones parecen más bien ocasionales. Por otra parte, tampoco avala propiamente la etiqueta de grupo terrorista, si bien al decir que está “aterrorizando” las comunidades urbanas y suburbanas de Estados Unidos, este informe de Heritage Foundation ha servido para empujar a la Administración Trump hacia la designación del TdA como organización terrorista extranjera. Y es cierto que algunos de los crímenes del TdA en Estados Unidos, donde hasta 2021 no se había documentado su presencia (hoy se ha registrado su actividad en una veintena de estados), han supuesto un shock en la opinión pública por su brutalidad. ●

Los cárteles mexicanos sacan beneficio del ‘boom’ del aguacate, fruto estrella en EEUU

El sector mueve en México más de 3.000 millones de dólares anuales y supone una interesante diversificación para los grupos de narcotráfico

° Michoacán es el estado de mayor cultivo; en su producción operan ilícitamente Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Los Viagras y Caballeros Templarios.

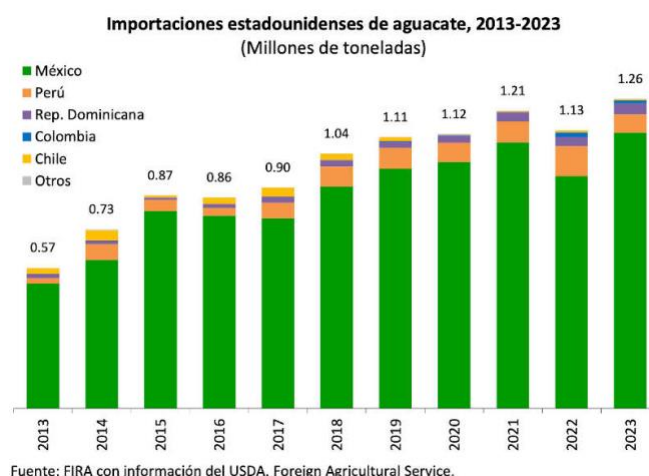
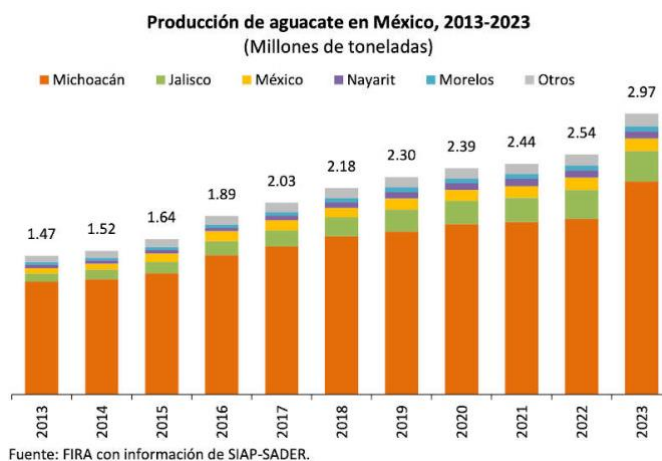
° Las organizaciones criminales cobran cuotas a los agricultores, controlan rutas de transporte y suministros y coaccionan a los gobiernos locales.

° Los productores han organizado grupos de autodefensa para hacer frente a la situación, pero eso no ha impedido que individuos y familias marchen a otros lugares.

TALAL AL NAIMI

El consumo de aguacate ha crecido enormemente en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que anualmente importa de México alrededor de un millón de toneladas. El guacamole, pasta aderezada hecha de ese producto, se ha convertido en acompañamiento culinario de la Super Bowl, la gran fiesta del fútbol americano, ocasión para la que en 2024 EEUU llegó a importar un [récord](#) de 137.000 toneladas (en 2025 descendió ligeramente, presuntamente por su mayor precio). Esto supone un impacto positivo en el sector agrícola de México y en la economía de todo el país.

Sin embargo, actualmente la industria enfrenta desafíos importantes, en particular la infiltración de las organizaciones de narcotraficantes. Al ser una industria que genera grandes ganancias —apodado el aguacate como ‘el oro verde’, su producción y comercialización tiene un valor anual de 3.000 millones de dólares—, el país ha presenciado un aumento determinante de la actividad de los cárteles que aprovechan la considerable demanda de aguacates por parte de Estados Unidos. La sobreproducción de hoja de coca en Colombia, que ha distorsionado algo los precios, y la competencia del fentanilo han motivado en algunos cárteles el deseo de diversificación del negocio.



Los cárteles de narcotraficantes han puesto en peligro la estabilidad de la industria del aguacate controlando las cadenas de suministro, explotando a los agricultores y aprovechando el

comercio de este producto para realizar sus negocios ilícitos que conducen a la corrupción y la violencia.

El atractivo económico

La demanda internacional de aguacate de México ha experimentado un aumento determinante, especialmente por parte de Estados Unidos, que importa alrededor del 80% de la producción mexicana. Precisamente desde que en 1997 EEUU autorizó la compra de aguacates mexicanos, en aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor tres años antes, el consumo de este producto en el mercado estadounidense no ha dejado de crecer, impulsando el sector en origen.

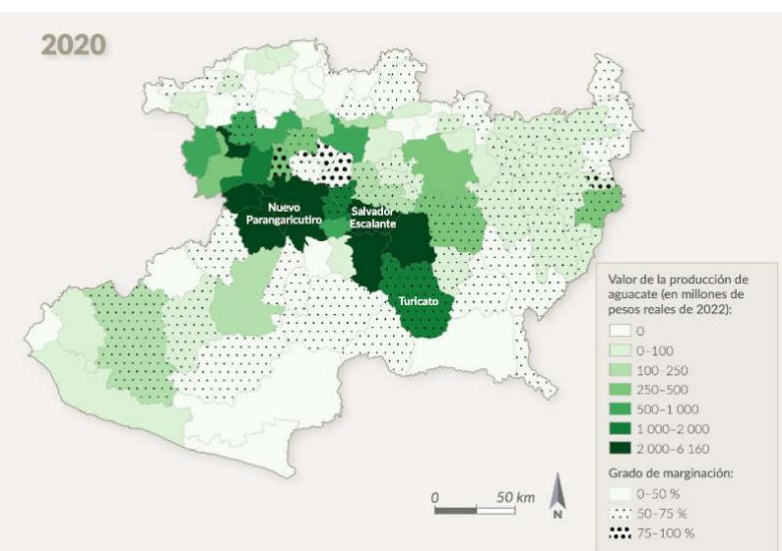
Los cárteles han utilizado diversas formas de manipulación, coerción y extorsión para sacar provecho de la industria del aguacate, [especialmente](#) en la región de Michoacán, donde se cosecha la mayor parte de la producción. Solo Michoacán, de acuerdo con el Panorama Agroalimentario de la entidad gubernamental FIRA, [produjo](#) 2,25 millones de toneladas de aguacates en 2023 (el 75,8% del total de producción nacional, a distancia del 10,9% de Jalisco; el 4,5% del estado de México y el 2,6% de Nayarit).

Algunos de los cárteles atraídos por este negocio son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Familia Michoacana, Los Viagras y Caballeros Templarios. Estos grupos que perciben la industria del aguacate como más estable en comparación con su negocio tradicional de tráfico de drogas. Por lo tanto, el atractivo económico del aguacate lo convierte en un negocio lucrativo para las organizaciones de narcotráfico.

Tácticas de los cárteles

Si bien muchos productores y exportadores se rigen por prácticas limpias, los cárteles [aprovechan](#) técnicas coercitivas y violentas para dominar el sector del aguacate y este método se dirige a funcionarios gubernamentales, transportistas y agricultores. Una de las técnicas ampliamente empleadas implica las tarifas de protección o ‘cuotas’ que pagan los agricultores y transportistas en circunstancias de coacción. La imposición de tarifas contribuye a encarecer producción y perjudica a los agricultores, propiciando que abandonen sus campos.

El control del suministro es otra forma de ejercer influencia sobre el negocio del aguacate. Los cárteles han dominado los métodos para detener los corredores relacionados con el transporte y las cuotas de los conductores, al tiempo que interceptan las entregas de los envíos para garantizar que conservan el control sobre los precios y/o la dirección de la cadena de suministro. Además, los cárteles utilizan su influencia dentro del gobierno municipal, sobornando a los funcionarios para que ignoren el negocio del cártel o emitiendo permisos que garantizan el control del cártel en las zonas que contienen aguacates.



Producción de aguacate y pobreza en el estado de Michoacán [Global Initiative, a partir de datos de SIAP y CONEVAL]

Así, como detalla un [informe](#) de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, desde 1994 hasta 2022, la superficie cultivada en México ha aumentado un 173%, alcanzado las 252.133 hectáreas, y el valor de la producción se ha incrementado un 527%, situándose en 63.450 millones de pesos (3.105 millones de dólares). La industria del aguacate de México se ha transformado en una empresa lucrativa y ha atraído significativamente los intereses de las organizaciones criminales, que perciben la industria como más rentable en comparación con su negocio de narcotráfico.

Esto significa que los cárteles tienen [poder](#) libre para participar en actividades que desplazan a las comunidades indígenas y contribuyen a la inseguridad donde los funcionarios se sienten amenazados. Las familias de los agricultores también corren riesgo porque las personas que operan bajo los cárteles han causado muchos secuestros, asesinatos y destrucción de propiedades. Este entorno [de miedo](#) no solo afecta a la economía local, sino también a la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad que se sienten amenazados por la violencia por estar involucrados en uno de los sectores más rentables de la agricultura del país.

Impacto y respuesta

Al ser un crimen organizado, la infiltración de los cárteles afecta a las comunidades locales en muchos frentes. En términos generales, la extorsión de tarifas hace que sea extremadamente difícil para los agricultores alcanzar el punto de equilibrio, lo que paraliza el negocio agrícola. Los pagos de protección junto con los costos generales de inseguridad hacen que los agricultores de aguacates opten en ocasiones por abandonar sus tierras. Esto ha llevado a la reducción de la población en las áreas que dependen del cultivo de aguacates, lo que erosiona gravemente el desarrollo comunitario y reduce el crecimiento regional.

El gobierno de México no ha podido frenar la entrada de cárteles en el sector del aguacate. Según los medios de comunicación locales, en las zonas donde se cosecha este cultivo, las fuerzas de seguridad han tratado de establecer ‘áreas sin cárteles’, pero el control de las instituciones locales por parte de las organizaciones delictivas sigue obstaculizando los esfuerzos. El mercado estadounidense tiene interés en confirmar que sus importaciones no están financiando a delincuentes, y algunos importadores han comenzado a trabajar con las fuerzas del orden mexicanas para crear cadenas

de suministro seguras. Sin embargo, es difícil determinar el origen del flujo de productos agrícolas.

Resistencia local

Ante la amenaza de los cárteles en el nicho del aguacate en Michoacán, las comunidades locales y los agricultores han comenzado a buscar los medios para defenderse de los cárteles. Un ejemplo destacado de dicha participación es la aparición de grupos de [autodefensa](#) contra los cárteles en las comunidades más afectadas por la violencia. Dichos grupos están formados y encabezados por los residentes de la región en particular, que a menudo son agricultores que, para proteger sus tierras y negocios, no tienen que depender únicamente de los gobiernos federal o estatal.

Si bien a veces son anónimos o se aceptan como entidades oficiales, las autodefensas han [brindado](#) a las comunidades la oportunidad de luchar contra la extorsión y la violencia y han proporcionado a los agricultores herramientas para proteger sus ingresos. Además, están surgiendo otros modelos de agricultura cooperativa como un medio importante a través del cual otros agricultores de pequeña escala evitan la dominación de los cárteles. Al integrar recursos, ingresos y autoridad práctica para el control comunitario, a su vez reducen su susceptibilidad a tales demandas y fortalecen las economías locales.

El gobierno local también se ha convertido en un socio clave en estos esfuerzos impulsados localmente. En los últimos años, muchos de los municipios de Michoacán se han afiliado tanto a ONG como a empresas para abordar mejor los problemas de seguridad y brindar ayuda para establecer otras fuentes de ingresos. Este enfoque buscará [descentralizar](#) las rutas comerciales que están dominadas principalmente por los cárteles, así como fortalecer las defensas de las comunidades contra la agresión de los cárteles. ●

Sin ‘Paz Total’: Fuerte recrudecimiento de la violencia en Colombia durante el Gobierno Petro

El conflicto abierto en el Catatumbo, que enfrenta al ELN, disidencias de las FARC y el Ejército, ha desplazado nuevamente a decenas de miles de personas

° *El presidente Duque fue ineficiente en la implementación del histórico acuerdo de paz de 2016; Petro creyó que él podía ir incluso más allá, pero la situación ha ido para atrás.*

° *En sus dos años y medio en la presidencia, Petro ha reducido el número de efectivos y las capacidades del Ejército colombiano; cuando lo ha necesitado se ha visto en dificultades.*

° *El gobierno de izquierda combate su convencimiento: dirigir operaciones militares contra la guerrilla del ELN va contra su tradición y postura ideológica.*

SAMUEL TORRES CARRERO

Han pasado ya casi 10 años desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), un hito histórico y galardonado con un Premio Nobel de la Paz, que dio fin al conflicto civil más longevo de América Latina, cuyas circunstancias han quedado expuestas en el [informe final](#) de la Comisión de la Verdad constituida a tal efecto. Sin embargo, hoy el panorama de seguridad en Colombia es desalentador. En tan solo dos años y medio del gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha vivido algunos episodios de violencia que no vivía desde finales del siglo pasado y principios de los 2000. La respuesta improvisada del gobierno a la última ola de violencia en el Catatumbo, generada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), demuestra el fracaso de la política de seguridad y el retroceso que ha tenido el país en esta misma materia.

El aumento de la violencia y la reagrupación de los grupos armados al margen de la ley no debe ser vista como noticia de última hora. Al contrario, las bases para un recrudecimiento vienen desde los años posteriores a la firma del acuerdo de paz. Tras la firma de este en 2016, Colombia tuvo unos dos años de relativa calma donde el número de asesinatos, secuestros y reclutamiento por parte de grupos criminales disminuyeron a nivel nacional. Sin embargo, de

2018 a 2022, el gobierno de Iván Duque se caracterizó por su falta de compromiso en implementar el acuerdo. Según la Cruz Roja, la situación humanitaria del país se [deterioró](#) desde 2018 con el aumento del secuestro y la extorsión. La política de seguridad de Duque privilegió el control territorial y el debilitamiento de los grupos armados y narcotraficantes, pero fue [ineficiente](#): la violencia aumentó en nuevos focos, como en las fronteras con Brasil, [Venezuela](#) y Panamá. En 2019, más de 2.000 hombres habían [vuelto a las armas](#), y se registraba un aumento de asesinatos de líderes sociales y altos índices de desplazamiento interno.

La falta de voluntad de cumplir el acuerdo no llevó al Estado a aquellas zonas más abandonadas, en las que se esperaba una mayor reintegración de excombatientes y en las que podía darse un alto riesgo de reincidencia en violencia, generándose así un vacío de poder. Hubo territorios en los que ciertamente las antiguas FARC se desmovilizaron, pero el Estado nunca llegó, allanando el camino a otras organizaciones criminales (como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) y a la reincidencia en las armas desde las antiguas filas de las FARC (como el Estado Mayor Central). Esto muestra cómo históricamente en Colombia la violencia se transforma y [desarrolla](#) por la falta de un Estado legítimo. El máximo fracaso del acuerdo de paz



Región del Catatumbo, junto a Venezuela. Ilustración incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad

se dio en 2019 con el establecimiento de La Segunda Marquetalia, conformada por disidentes del proceso y altos mandos de las FARC.

Petro y su Paz Total

Tras el triunfo en 2022 del candidato Gustavo Petro, que llevó al poder al primer presidente de izquierda, el país se encaminó hacia una nueva manera de abordar el conflicto, los asesinatos de líderes sociales y la reincidencia. La política de la Paz Total se convirtió en la joya de la corona en materia de seguridad para el Gobierno Petro, asegurando, en ese entonces, que el país podría cesar su estado permanente de conflicto interno y la llegada de la paz. Sin embargo, hoy esto está lejos de ser así.

La política de la [Paz Total](#) establece un marco legal para que el gobierno negocie con los grupos armados criminales y les conceda reducciones de condena si cooperan en diálogos sociales. Es una apuesta por negociar y establecer procesos de sostenimiento de justicia, tal como en 2016, con tantos grupos armados como sea posible. La ley de Paz Total incluye al

crimen organizado de naturaleza no política, asociado a economías ilegales, narcotráfico y minería ilegal.

Las críticas a esta ley fueron amplias antes de que se hundiera en el Congreso a finales de 2023, argumentando que la Paz Total carecía de marco jurídico sólido y comprometía la independencia de la Fiscalía General de la Nación, ya que otorgaba condenas políticas a ofensas criminales. Además, como [advertía](#) ‘The Economist’, ni el ELN o el Clan del Golfo, las mayores organizaciones criminales del país estaban interesadas en ese proceso.

En este contexto, a principios de 2025 estalló la última ola de violencia, en el Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, con confrontaciones entre disidencias de las FARC, el ELN y el Ejército colombiano. Los sucesos, que han supuesto el desplazamiento de 30.000 personas, han dejado en evidencia el poderío que han ganado estas organizaciones criminales. Ante ello, en una estrategia de guerra [improvisada](#), el gobierno que se había propuesto la Paz Total tuvo que recurrir al Ejército. Y como este había

visto reducido sus filas y disminuido sus capacidades ofensivas en los dos años del gobierno de Petro, tuvo algunos problemas para hacer frente a grupos ilegales que, como el Clan del Golfo, han crecido aceleradamente. También durante el gobierno Petro la cúpula militar ha sufrido cambios notorios que solo han aumentado la desmoralización en la institución.

La respuesta del gobierno fue extremadamente limitada, ya que dirigir operaciones militares contra el ELN va contra su postura ideológica y no tiene las capacidades operativas para responder adecuadamente. La crisis es aún más angustiante cuando meses antes, en agosto de 2024, el Ministerio de [reconoció](#) un retroceso en el control territorial y la pérdida de algunas regiones por parte del Ejército y la policía, junto con el aumento en las tasas de secuestro y extorsión.

Sin embargo, un actor importante no abordado hasta ahora es Venezuela. Tras la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela en 2019 el ELN ha tomado [control efectivo](#) de la zona de frontera en ambos lados y desde ese momento no ha disminuido su capacidad de control. Ese control territorial en el vecino país le

ha facilitado aumentar sus actividades de economía ilegal, tráfico de drogas y minería ilegal, con la connivencia del gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha hecho de Venezuela un santuario estratégico e ideológico de grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC.

Para el Gobierno Petro, la violencia en los últimos meses y la falta de una respuesta militar y/o humanitaria ha sido el rotundo fracaso de la política de Paz Total. Petro ilusoriamente quiso tender la mano a grupos armados a los que no les interesa negociar, pues se encuentran mejor en la ilegalidad. Un nuevo estallido de violencia en Colombia en la época post-2016 era algo anunciado y que se venía cocinando en los últimos años. El gobierno se encontró con una situación que le ha superado y sus respuestas han sido limitadas y sin resultados.

Aunque el presidente colombiano busca la aprobación del estado de excepción para resolver el conflicto en el Catatumbo —“el ELN tomó el camino de la guerra y guerra tendrá”, ha escrito en X—, el Poder Judicial y el Congreso no coinciden con él, por lo que sus manos están atadas. ●

Los femicidios en México bajan ligeramente tras rayar los mil anuales en el mandato de AMLO

Con Sheinbaum se ha vuelto a cifras previas al comienzo del sexenio de su antecesor, aunque la violencia en el país sigue siendo alta y la situación inestable

° *La guerra a los cárteles de Calderón conllevó un alza de los homicidios en general; los femicidios bajaron con Peña Nieto, pero las estadísticas empeoraron con López Obrador.*

° *El arraigado machismo en la sociedad mexicana, agravado con los códigos de los narcotraficantes, explica en parte la perdurabilidad del problema.*

° *La dificultad de definir el feminicidio y los cambios en el sistema de cómputo oficial da lugar a números divergentes que alimentan la desconfianza social.*

MARÍA LUISA PARDO

El contexto de violencia en México tiene en la tasa de feminicidios una alarmante manifestación. Las [cifras](#) del gobierno mexicano muestran una ligera mejora, aunque el descenso es lento y el número de mujeres asesinadas sigue siendo elevado.

Hace diez años, los asesinatos de mujeres en los que el género estuvo entre las motivaciones del atacante habían alcanzado un mínimo de 28 mensuales (en mayo de 2015). A partir de ahí se produjo una contante escalada hasta llegar a los 112 al mes (mayo de 2021), que significó un tope del que se está bajando en una curva descendente.

Así, el mandato de Andrés Manuel López Obrador fue el sexenio en el que más feminicidios se registraron (un total próximo a los 5.500, rayando varias veces los mil anuales, aunque los números varían según las fuentes). Hacia el final de la presidencia de AMLO, que confluyó en septiembre de 2024, las cifras de homicidios en general mejoraron, y así ocurrió también específicamente con los feminicidios, de forma que los primeros meses de Claudia Sheinbaum no han supuesto una sustancial variación, si bien podría esperarse que continúe la tendencia de descenso. En enero de 2025 se contabilizaron 54 feminicidios, la segunda cota más baja en siete años.

Femicidio y entorno cultural

Según [ONU Mujeres](#), los feminicidios pueden definirse como el “asesinato intencional con una motivación relacionada con el género, que puede estar impulsado por roles de género estereotipados, discriminación hacia mujeres y niñas, relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, o normas sociales perjudiciales”. Dicho esto, la epidemia de feminicidios en México puede atribuirse a normas culturales profundamente arraigadas en el machismo, una lucha constante con los cárteles de la droga, así como a un gobierno negligente que continúa otorgando impunidad a los perpetradores, ignorando la crisis. Por lo tanto, se crea un panorama violento donde la violencia de género prospera y la justicia sigue siendo esquiva.

El gobierno mexicano define el [machismo](#) como un conjunto de actitudes y comportamientos que violan injustamente la dignidad de las mujeres en comparación con los hombres, a menudo asociado con normas de género profundamente arraigadas y perpetuadas por aspectos culturales inamovibles. Según una cita de este sitio web oficial, “los estereotipos sobre el machismo constituyen ingredientes críticos del capital simbólico utilizado por los mexicanos comunes. Para muchos, el machismo se considera parte constitutiva del patrimonio nacional de México”. Esto se traduce

Víctimas mujeres de feminicidio a nivel nacional — MÉXICO

De enero 2015 a enero 2025



Las cifras marcadas corresponden a los meses de enero (más el mes con menor y mayor registro). Gob. de México

directamente en la dinámica social y familiar, donde se considera que el hombre tiene derecho a gestionar las interacciones y la vida de las mujeres.

Esto conduce a altas tasas de violencia de género generalizada. Un informe gubernamental [indica](#) que en 2021 el 70,1% de las mujeres a nivel nacional reportaron haber sufrido violencia de género. La categoría más alta es la psicológica, con una tasa del 51,6%, seguida de las agresiones sexuales con un 49,7%, la violencia física con un 34,7% y, finalmente, la discriminación económica con un 27,4%. Esto es especialmente preocupante [considerando](#) que más del 40% de los perpetradores de feminicidios son familiares, exparejas o las propias parejas. Los casos de violencia doméstica también han mostrado un mayor nivel de violencia en el acto mismo, siendo los métodos más comunes el estrangulamiento o el apuñalamiento repetido. Esto demuestra la naturaleza personal del acto y, por lo tanto, la dinámica de poder desequilibrada que perpetúa el machismo.

Relación con los cárteles de droga

Se estima que los [ingresos](#) anuales de los cárteles de la droga mexicanos rondan los 35.000 millones de dólares, lo que no solo incrementa la

delincuencia generalizada, sino también los feminicidios en las regiones afectadas. Estos grupos dependen en gran medida de la violencia y la intimidación generalizadas. En muchos casos, los feminicidios que involucran a perpetradores vinculados a los cárteles se dedican a actos de terrorismo no solo contra rivales, sino también con el propósito de reforzar las normas de género y castigar la deshonra percibida. Las mujeres cercanas a los miembros de estas organizaciones, o aquellas que simplemente residen en zonas dominadas por los cárteles, a menudo enfrentan mayores riesgos, especialmente porque la violencia de género se utiliza como método para afirmar el poder y el control dentro de las comunidades, y porque la trata y la explotación de personas son prácticas comunes dentro de las organizaciones ilegales.

Existe una clara relación entre el aumento de la actividad de estos grupos y el aumento de las tasas de feminicidio. Un [ejemplo](#) de feminicidio relacionado con un cártel fue el hallazgo de cinco cadáveres de mujeres en Cuautla a finales de 2022. Los cuerpos desmembrados fueron descubiertos en bolsas por toda la ciudad y tres de ellos tenían inscripciones manuscritas que afirmaban que los asesinatos formaban parte de un plan de venganza contra un cártel rival. Además, este caso, como muchos otros, sigue sin

resolverse, ya que es común que las autoridades mexicanas ignoren los asesinatos por motivos de género.

Impunidad y falta de rigor

En México, la tasa de impunidad de los feminicidios es alarmantemente alta; se estima que alrededor del 92% de los feminicidios permanecen [impunes](#). Las cifras de femicidios lógicamente son inferiores al total de mujeres y niñas asesinadas, pero muchas veces hay sospecha de falta de rigor en el cómputo: las autoridades mexicanas se muestran reticentes a procesar los casos de feminicidio debido a la corrupción y la falta de recursos. Las investigaciones a menudo carecen de la financiación, la capacitación y el personal necesarios para perseguir adecuadamente este tipo de casos penales. Esto pone en peligro la eficacia de las autoridades a la hora de reunir pruebas, realizar investigaciones y, en última instancia, procesar a los responsables. Como se mencionó anteriormente, alrededor del 90 % de los casos permanecen sin resolver o simplemente se descartan.

Además, las autoridades mexicanas se apresuran a clasificar erróneamente lo que deberían considerarse casos de feminicidio como suicidios o accidentes. Grupos de derechos

humanos han [documentado](#) que muchos feminicidios no son reconocidos como tales por las fuerzas del orden. Esto, una vez más, resulta en investigaciones que carecen de rigor y atención a los patrones de violencia contra las mujeres. Durante su mandato, al ser preguntado sobre el sonado caso de Ingrid Escamilla (asesinada por su pareja), López Obrador dijo a periodistas que [no quería](#) que “los feminicidios distrajeran la atención de la rifa”, en referencia a una rifa que organizó su administración en torno a la venta del avión presidencial, ridiculizando masivamente la crisis nacional en su conjunto y demostrando la frivolidad en la que se tratan estos casos.

Como primera presidenta de México, Sheinbaum no parte de un récord muy positivo. Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, los feminicidios aumentaron un 7,7%, si bien el contexto general de violencia era algo más extremo. Está por ver qué eficacia tiene el giro que está dando respecto a López Obrador a la hora de afrontar los asuntos de seguridad (está dejando de lado el ‘abrazos y no balazos’ de su antecesor). No obstante, sigue sin abordar los problemas sistémicos del machismo y la corrupción en las fuerzas del orden, que aseguran la persistencia de la violencia de género y la impunidad hacia los perpetradores. ●



Universidad
de Navarra



CENTER FOR
**GLOBAL
AFFAIRS**
STRATEGIC STUDIES